

**Juicio: actor: Oliveira, María Elena. Demandado: Provincia de Tucumán (Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán) Causa: Acción de revocación. Nulidad acto administrativo y medida cautelar. Expediente n°**

San Miguel de Tucumán

19

de marzo de 2024

Corte Suprema:

Viene en vista de este Ministerio Fiscal la cuestión de competencia suscitada entre la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y el Juzgado del Trabajo de la I Nominación.

**I- a)** La Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II por sentencia del 28/12/2023 declara su incompetencia para entender en los presentes autos.

Justifica su resolución afirmando que *"el artículo 30 del Decreto N° 2380/1988, reglamentario de la Ley N° 5.650 de Creación de la Secretaría de Estado de Trabajo establece que "la resolución que impone multa, podrá ser apelada (...) El recurso se interpondrá ante Dirección Provincial del Trabajo y deberá ser fundado. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido, deberán ser remitidas las actuaciones ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo"*.

Manifiesta que *"la competencia atribuida por dicha normativa ha sido modificada por Ley N° 6.204 (Código Procesal Laboral, texto conforme ley N° 8.988), cuyo artículo 4 prescribe: "Competencia de los Jueces del Trabajo. Los Jueces del Trabajo conocerán y decidirán: 4. en los casos establecidos por las leyes especiales" (cfr. Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, Sentencia N° 167, 28/09/2012, "Gutiérrez, Miguel Ángel y otros c. Pol Ambrosio y Cia. s. Apelación Actuación Mero Trámite)". En consecuencia, siendo que la cuestión remite a materia del trabajo (riesgos del trabajo y seguridad en el trabajo) y atento a la asignación de competencia al Juzgado del Trabajo respecto de la impugnación de un multa prevista por una ley especial (Ley N° 5.650 de creación de la Secretaría de Estado de Trabajo), corresponde declarar la incompetencia en razón de la materia de esta Sala II° y remitir este expediente, por intermedio de mesa de entradas, al Juzgado del Trabajo que por turno corresponda, invitándolo a asumir su competencia para entender en la presente causa"*.

**b)** Pasados los autos al Juzgado del Trabajo de la I° Nominación, por decreto del 07/03/2024 dispone su incompetencia.

La justifica razonado que *"en atención a que de la compulsa de las actuaciones adjuntadas el día 14/02/2024 surge que la Sra. Maria Elena Oliveira, representada por la Dra. Silvina Maria Ortiz Bulacios, inicia acción de revocación / nulidad del acto administrativo en contra de la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán, con el objeto de declarar la nulidad y/o revocación de la*



resolución N° 637/14-SET (DT) dictada en fecha 13/12/2022 en el marco del Expte: 6653/181-DI-2021... se desprende el hecho de que, dicho acto administrativo fue resuelto posteriormente a la sentencia de fecha 02/12/2022 dictada en "JUICIO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ OLIVEIRA MARIA ELENA s/ ESPECIALES (RESIDUAL) - 1652/22" que tramita por ante esta misma Oficina de Gestión Asociada n° 1, Juzgado del Trabajo de la XI Nominación, en la que se declara la incompetencia para entender en dicha causa, por el hecho de entender que el planteo efectuado por la Sra. Oliveira fue el recurso de reconsideración en contra de la resolución N° 351/14-SET (DT), teniendo como fin que el mismo órgano administrativo que dictó la resolución atacada, en caso que así lo considere, lo revoque, sustituya o modifique por contrario imperio. En conclusión, considero que esta proveyente sería competente para entender sólo en aquellos casos en los que se interponga el recurso de apelación en los términos del art. 30 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 5.650. No encontrándose ambas causas referidas encuadradas en dicho remedio procesal, por cuanto, de la Resolución N° 351/14-SET (DI) de fecha 02/08/2022 la Sra. Oliveira planteó recurso de reconsideración en los términos del art. 63 de la Ley 4.537 (a mayor abundamiento remito a la sentencia de fecha 02/12/2022 mencionada), y de la resolución N° 637/14-SET (DT) la parte actora interpuso nulidad del acto administrativo, me declaro incompetente para entender en las presentes actuaciones".

**II- V.** Corte es superior tribunal común, pues la cuestión negativa de competencia se ha entablado entre dos órganos judiciales de diversa competencia material, correspondiendo, entonces, que en ejercicio de la facultad que le otorga el art. 18 inciso 1° acápite b) de la Ley 6238 –consolidada- dirima el asunto.

**III- a)** La demanda incoada por la señora María Elena Oliveira está dirigida a anular y revocar la resolución n° 637/14- de la Secretaría de Estado de Trabajo- Dirección de Trabajo dictada en el expediente administrativo : 6653/181-DI-2021.

Relata que "en fecha 27.12.21, por medio del Depto. de inspección y Vigilancia de la Secretaría de Estado de la provincia, se llevó a cabo una inspección laboral en el domicilio de mi mandante- Av. Monseñor Diaz N° 499, Banda del Río Salí- que tramitó por Expte. 6653/181-DI-21. En dicho acto se labró acta N° 10769 ... A fs. 6 del expte. referenciado, obra acta de audiencia de fecha 04.01.22 ... adjuntando parte de la documentación requerida en inspección de fecha 27.12.21", manifiesta que luego se acompañó documentación faltante.

Expresa que se le realizó una acusación en fecha 10.03.22, que luego se le notificó y su parte formuló descargo ante la oficina de Sumarios y multas.



Se ordenó el sumario administrativo y que por la Resolución N° 351/14-SET (DI) de fecha 02.08.22, se le impuso una multa de \$82.000.

Relata que interpuso recurso de reconsideración y que en el expediente administrativo *"consta un dictamen administrativo (no jurídico) no vinculante firmado por María Graciela Rodríguez, quien alega que el recurso interpuesto es de apelación del art. 30 del Dcto. Reglamentario 2380/88, y que: (i) el recurso es extemporáneo por haberse interpuesto con posterioridad a los 3 días, la vez que (ii) no se pagó la multa exigida como de previa condición para acceder a la revisión por el órgano jurisdiccional. Por lo tanto, conforme ese dictamen (erróneo por cierto), debería haberse dictado resolución administrativa que rechace el recurso por extemporáneo y por falta de cumplimiento del pago previo. No obstante, el expediente fue remitido a la justicia del trabajo como si el recurso a criterio del Sr. Director hubiera reunido los requisitos de admisibilidad previa. He aquí la primera contradicción. Esta decisión administrativa de ordenar el pase del expediente al fuero del trabajo no fue notificada a esta parte"*.

Afirma que *"ingresado el expediente administrativo a la Justicia del trabajo, resultó sorteado el Juzgado de primera instancia de la XI nominación"*, y que tras dictaminar la agente fiscal en fecha 02.12.22 la Sra. Jueza Dra. Sandra González dictó sentencia declarándose incompetente por estimar que lo planteado por su parte es un recurso de reconsideración y no una apelación.

Manifiesta que *"de los antecedentes de la causa, surge que tanto la agente fiscal como la Sra. magistrada han coincidido en calificar el recurso interpuesto como de reconsideración y no de revisión judicial"*.

Expresa que *"la resolución 637/14 aquí recurrida interpreta el recurso interpuesto como de revisión judicial cuando "de la redacción de la presentación de fs. 54/55 se vislumbra con prístina claridad que la intención de la presentante fue interponer un recurso administrativo, y no un recurso para revisión judicial"*.

**b)** De lo expuesto en la demanda se colige, sin duda alguna, que la actora impugna un acto administrativo reclamando su nulidad/revocación.

Si bien dicho acto administrativo ha sido dictado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el ejercicio de su competencia específica -facultades que le confiere la ley n° 5650-, no luce acreditado que llegue a revisión el recurso de apelación previsto en el art. 30 del Decreto Reglamentario de la mencionada ley (decreto 2380/88).


Es más, al examinar las constancias de autos -y la demanda- surge que la actora obvió *apelar* la resolución N° 351/14-SET que impuso la sanción, para presentar un recurso de reconsideración, y es por ello que procura la nulidad de la resolución n° 637/14-SET del 13/12/2022.

De lo expuesto se colige que lo que aquí se peticiona es la nulidad de un acto administrativo que no contiene ninguna sanción, y que no se procura la revisión de una multa por el ejercicio del derecho de apelar expresado en el decreto 2380/88.

Por lo tanto, según mi entender la competencia para entender en este proceso corresponde al fuero contencioso administrativo conforme el art. 69 de la LOPJ.

**IV-** Por los motivos dados, soy de opinión que v. Corte debe dirimir la cuestión de competencia adjudicándola a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Mi dictamen.



Dr. EDMUNDO J. JIMENEZ  
MINISTRO FISCAL  
MINISTERIO PUBLICO FISCAL  
TUCUMAN